

§ 192.—RECURSO DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA: EN FASE DE ADMISION ES CONSTITUCIONAL LIMITAR EL NUMERO DE SENTENCIAS DE CONTRASTE

Francisco Javier Banchs Naya c. INEM.

Tribunal Constitucional (Sala 1.ª).

Sentencia 89/1998 de 21 de abril de 1998, BOE 20.5, 29.

Constitucional: recurso de amparo (social: prestaciones de desempleo).

Magistrado Ponente: Gimeno Sendra.

Abogados: R. Rodríguez Fernández.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Banchs, director y representante del Consejo de Administración de la empresa «Aigües de Mata-depera, S.A.», tras ser despedido, solicitó al INEM el abono de las prestaciones de desempleo. Tal solicitud fue denegada por no acreditar su condición de trabajador por cuenta ajena. En primera instancia, el Juzgado de lo Social dictó sentencia declarando la procedencia de tal prestación y condenando al INEM a su abono, pronunciamiento que fue revocado posteriormente en suplicación. Frente a la sentencia de suplicación el Sr. Banchs interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. Conforme exige el art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), se aportaron las oportunas sentencias para acreditar la contradicción jurisprudencial que motiva este recurso extraordinario. En relación con este requisito, el Tribunal Supremo, exigió al recurrente que seleccionara una de las sentencias, pues una sola es suficiente para acreditar el requisito de la admisión. Analizada esa única sentencia el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación por no quedar acreditada la contradicción.

La cuestión fundamental que se debate en el presente recurso de amparo es si resulta conforme al art. 24.1 CE que, a los efectos de la admisión del recurso de casación para la unificación de la doctrina, el Tribunal Supremo limite el número de sentencias de contraste que pueden aportarse y decida acerca de la admisión o inadmisión del recurso en base a una única sentencia.

Fallo

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo, confirmando la inadmisión del recurso de casación.

Fundamentos jurídicos

Primero: El recurrente en amparo requiere un pronunciamiento de este Tribunal en orden a una triple cuestión que, tal como acaba de describirse en los antecedentes, consiste en determinar si la sentencia dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incurrir en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la causa de inadmisión alegada por el recurrente en relación al recurso interpuesto por el Inem, así como si ha lesionado el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley y a no sufrir discriminación (art. 14 CE) como consecuencia de haberle denegado las prestaciones por desempleo que había solicitado. Igualmente, debe resolverse si el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Su-

premo que ha inadmitido el recurso de casación para la unificación de doctrina ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) al haber limitado a una las sentencias sobre las que ha de fundarse la contradicción de doctrina requerida para acceder a dicho recurso. Tanto el Abogado del Estado, que ha comparecido en este procedimiento de amparo en representación del INEM, como el Ministerio Fiscal, han interesado en sus alegaciones la desestimación de todos los motivos de amparo.

Segundo: Deben abordarse, en primer término, las causas de inadmisión que han opuesto el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado que, de ser estimadas, impedirían un pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo planteadas.

A) En relación a la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, ambos alegan que la demanda incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) en relación al art. 44.1 a) LOTC, por no haberse agotado la vía judicial previa al amparo, ya que el recurrente no impugnó la providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1996, a través de la cual el órgano judicial le requirió para que eligiese como sentencia de contradicción una sola de entre las varias que había aportado en su escrito de formalización del recurso y le advirtió de que, caso de no proceder a dicha selección, se entendería que optaba por la más moderna, siempre que se hubiera citado en el escrito de preparación. La representación del INEM y el Fiscal alegan que el recurrente no impugnó este requerimiento, sino que, por el contrario, cumplimentó la soli-

cidad y consintió en la vulneración que ahora alega limitándose a poner de manifiesto la indefensión que se producía a su juicio pero, según precisa el Ministerio Público, sin ejercitar ninguna pretensión impugnatoria que obligara al órgano judicial a un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión.

No es posible, sin embargo, apreciar que este motivo de amparo haya incurrido en la causa de inadmisión que acaba de apuntarse, puesto que la mencionada providencia del Tribunal Supremo no es la resolución judicial de la que cabría deducir, en su caso, la lesión constitucional denunciada. En efecto, el requerimiento contenido en ella no produjo, por sí solo, ningún efecto sobre la posición procesal del recurrente, como tampoco pudo vulnerar de modo directo los derechos de acceso al recurso y a no sufrir indefensión, ya que bien hubiera podido suceder que el recurso de casación para la unificación de doctrina hubiera sido inadmitido por causas ajenas a él, admitido por apreciar contradicción o incluso estimado en el fondo, supuestos en los que la limitación impuesta por la Sala de lo Social no habría tenido ninguna trascendencia para el recurrente y la queja suscitada ante este Tribunal carecería de todo objeto. Por contra, es la resolución judicial que acuerda finalmente la inadmisión del recurso por falta, precisamente, de contradicción entre la sentencia impugnada y la única que el recurrente pudo aportar, la que produce la restricción denunciada en amparo al revelarse como susceptible de impedir el acceso a la unificación de doctrina, de modo que sólo con ella se produce un efecto real en la posición procesal del recurrente (STC 30/1986, FJ 3.º). En consecuencia, al ser el auto de inadmisión irrecurrible conforme al art. 223.2 LPL, procede considerar cumplido el requisito de acceso al amparo previsto en el art. 44.1 a) LOTC y preservado el carácter subsidiario de la intervención de este Tribunal para reparar una eventual vulneración del derecho constitucional invocado.

B) Por otra parte, el Abogado del Estado alega que la demanda es extemporánea (art. 44.2 LOTC) en relación a la incongruencia omisiva reprocha-

da a la sentencia de suplicación, al haber optado el recurrente por interponer con carácter previo recurso de casación para la unificación de doctrina en lugar de acudir directamente ante este Tribunal.

Tampoco esta causa de inadmisión puede prosperar ya que, como reite radamente ha mantenido la jurisprudencia constitucional (SSTC 126/1994, 263/1994, 16/1995, 71/1996), la interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina no determina la extemporaneidad del amparo si aquél se revela como manifiestamente útil para que el recurrente pueda satisfacer sus pretensiones, por más que resulte finalmente inadmitido al apreciar el Tribunal Supremo inexistencia de contradicción. En el presente caso, el recurrente estimó que aquel recurso resultaba adecuado para resolver la contradicción que, a su juicio, existía respecto a la consideración como laboral o no de su relación con la empresa, de modo que, abierto dicho cauce procesal, era preciso esperar a que recayera una resolución judicial que lo cerrara antes de acudir en amparo para impugnar la incongruencia omisiva que se reprocha a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Tercero: Entrando ya en las cuestiones de fondo que se plantean en el recurso de amparo y frente al orden expositivo que se sugiere en la demanda, debe abordarse, en primer lugar, el motivo referido a la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que, si se estimara que la limitación impuesta por el Tribunal Supremo respecto al número de sentencias que podían aportarse como contradictorias vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el efecto reparador habría de consistir en la devolución de las actuaciones al momento en que aquel recurso se inadmitió por falta, precisamente, de contradicción con la única sentencia que el órgano judicial consideró para fundamentar la viabilidad del recurso, lo que obligaría entonces a un nuevo pronunciamiento sobre su admisión que tuviera en cuenta todas las aportadas en su momento por el recurrente, permitiendo con ello un eventual pronun-

ciamiento sobre el fondo que pudiera satisfacer la pretensión de aquél.

Se alega en la demanda que aquella restricción en el número de sentencias a efectos de acreditar la existencia del presupuesto de la contradicción contraviene la norma procesal (art. 222 LPL) ya que la literalidad de ésta confiere el derecho a aportar varias, y afecta igualmente al derecho de defensa, puesto que, limitada a una sola, el examen sobre la concurrencia de la contradicción queda igualmente ceñido a la única sobre la que finalmente puede intentar acreditarse aquélla. No cabe duda de que, aunque formalmente se invoca el derecho de defensa, en realidad resulta inseparable en este caso del de acceso a los recursos, toda vez que la casación para la unificación de doctrina fue inadmitida al estimarse que faltaba, precisamente, la contradicción requerida legalmente entre la sentencia impugnada y aquélla por la que optó el recurrente en cumplimiento de la exigencia de órgano judicial. Y siendo así, la valoración desde la perspectiva constitucional de la vulneración que se denuncia debe realizarse a partir de la consolidada jurisprudencia de este Tribunal que ha venido recordando que no resulta contraria a la tutela judicial efectiva la existencia de determinados requisitos de acceso a los recursos previstos en las normas procesales, que atienden a diversas finalidades consideradas por el legislador para su establecimiento; según la misma doctrina, tampoco lesiona el art. 24.1 CE la interpretación que los Tribunales ordinarios realicen de tales requisitos legales, tarea que cumple a ellos llevar a cabo y en la que el Tribunal Supremo ostenta la condición de intérprete último como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (art. 123.1 CE). La intervención de este Tribunal queda, pues, reservada a los supuestos en los que la interpretación o aplicación de los requisitos procesales resulta arbitraria, inmotivada, fundada en un error con relevancia constitucional o tomada de forma rigorista y manifiestamente desproporcionada entre la causa de inadmisión advertida y las consecuencias que se han seguido para la efectividad de la tutela judicial, criterio que, re-

cordado con carácter general, se ha aplicado específicamente para valorar la interpretación de los requisitos de acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina (SSTC 239/1993, 337/1993, 126/1994, 141/1994, 256/1994, 132/1997, 39/1998).

Este Tribunal ha declarado repetidamente que la finalidad de aquel recurso es la de garantizar la interpretación uniforme de la Ley y evitar la dispersión doctrinal derivada de la existencia de varios Tribunales Superiores, asegurando la primacía jurisdiccional del Tribunal Supremo a través de un recurso extraordinario y excepcional cuya razón de ser justifica y explica la exigencia legal de unos estrictos requisitos de admisibilidad materiales y formales (SSTC 239/1993, 337/1993, 126/1994, 256/1994, 318/1994, 132/1997, 39/1998). Aquella finalidad y este carácter excepcional han constituido el presupuesto sobre el que este Tribunal en múltiples decisiones ha rechazado que determinadas interpretaciones de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo relativas a distintos requisitos de acceso a dicho recurso puedan considerarse lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 239/1993, 132/1997, 39/1998 (*sic*) y AATC 260/1990, 297/1991, 294/1993, 216/1994, 22/1996); en concreto y por lo que ahora pueda interesar, hemos recordado que de la finalidad misma del recurso, cual es la de garantizar la igualdad de los ciudadanos en la aplicación e interpretación de la Ley en todo el territorio nacional, deriva el presupuesto legal de la contradicción, sin que, en atención a aquella, constituya un obstáculo formalista o irrazonable que la norma exija que se aporten resoluciones contradictorias entre sí respecto a los mismos litigantes u otros en idénticas situaciones donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiera llegado a pronunciamientos distintos, correspondiendo a la competencia del Tribunal Supremo apreciar si se dan todas estas condiciones (SSTC 126/1994, 141/1994, 256/1994).

Cuarto: A partir de estos criterios ha de concluirse que la interpretación del

Tribunal Supremo en cuanto al requisito exigido en el art. 222 LPL, no restringe injustificadamente la posibilidad de acceder al recurso hasta el punto de considerarla lesiva del derecho a la tutela judicial. Como expone el Fiscal en su informe, esta limitación responde a una reiterada jurisprudencia mantenida por el Tribunal Supremo sobre el alcance que deba darse al art. 222 RDLeg. 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, el cual reproduce literalmente el anterior art. 221 RDLeg. 521/1990, de 27 de abril, que aprobó el Texto Articulado de la misma Ley. El Tribunal Supremo ha declarado que la mención del singular o del plural que este precepto contiene respecto a la aportación certificada de la sentencia o sentencias contradictorias, debe entenderse referida a que la certificación será una cuando uno sea el tema o extremo de la contradicción y varias cuando varios sean los temas de la contradicción producida, interpretación ésta que, mantenida en el auto de la Sala General del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1995, ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada en múltiples decisiones posteriores (a título de ejemplo, sentencias de 7 de febrero, 17 de abril, 3 y 5 de julio y 29 de noviembre de 1996, así como el Auto de 10 de enero de 1997 y las sentencias de 27 de enero, 28 de febrero y 12 y 17 de marzo el mismo año).

El Tribunal Supremo ha venido aduciendo razones de economía y equilibrio procesales respecto al cumplimiento de este presupuesto de acceso al recurso, alegando que la falta de limitación en el número de sentencias para acreditar la existencia de contradicción puede llevar al absurdo y a un exceso de diversas y perjudiciales consecuencias. En este sentido, diversas resoluciones de las que se acaban de citar han puesto de relieve la sobrecarga que puede generarse para los órganos judiciales que deben certificar todas las que se desean aportar, su incidencia en el principio de celeridad que preside el proceso laboral, las dilaciones procesales innecesarias que conlleva tanto para el señalamiento para la votación y fallo del recurso como para la tramitación de otros, así como el descuido que pue-

de derivarse para el adecuado cumplimiento de otro de los requisitos de acceso al recurso como es la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que se alega, la cual deberá realizarse correctamente respecto a un número ilimitado de sentencias; finalmente, se han destacado también por el Tribunal Supremo las consecuencias que tiene para la parte recurrida dejar a la sola voluntad de la que recurre la determinación del número de aquéllas sobre las que fundamentar la contradicción, ya que no sólo se la perjudica con el retraso que acaba de apuntarse, sino también en el momento de articular su defensa procesal, puesto que se la obliga a una prolija comparación de sentencias a la que deberá proceder aun cuando sólo sea por precaución en la defensa de sus intereses, desplazándola así una carga que recae en exclusiva sobre la parte que interpone el recurso.

La interpretación del Tribunal Supremo pone además de relieve que la suficiencia de una sola sentencia para evidenciar la existencia de contradicción afecta únicamente al cumplimiento de este presupuesto procesal, pero no al fundamento de un motivo por infracción de la jurisprudencia. Y precisamente con base en esta distinción, el órgano judicial ha entendido que el requerimiento para seleccionar la que la parte considere más adecuada a los efectos de dicho cumplimiento no restringe injustificadamente el derecho de defensa. En tal sentido ha destacado la importancia de diferenciar dos momentos relevantes en el recurso de casación para la unificación de doctrina, como son el de la contradicción y el de la infracción. Así, según ha manifestado el Tribunal Supremo, el primero constituye la razón de ser del recurso, tendente a evitar la dispersión de la doctrina entre las diversas Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y que, por tanto, se configura como un presupuesto del recurso mismo; sin embargo, es la infracción la que sitúa al recurso en su sede propiamente casacional y es en el momento de fundamentar la infracción de las normas del ordenamiento o de la jurisprudencia cuando procede invocar la doctrina legal que se considera infringida, ci-

tando todas las sentencias de la Sala que se estimen pertinentes, sin que sea preciso acompañarlas de la correspondiente certificación.

Quinto: Las razones que acaban de exponerse y que justifican la limitación del número de sentencias de contraste exigida por el Tribunal Supremo, no permiten deducir, desde la perspectiva constitucional, la existencia de ningún obstáculo que impida acreditar la contradicción requerida para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina y que, por arbitrario o injustificado, pudiera entrañar una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La doctrina integradora sobre el art. 222 LPL mantenida por el órgano judicial al que, hemos de insistir, corresponde la interpretación última de las normas legales ex art. 123.1 CE se sustenta en la consideración de otros intereses y derechos con consistencia jurídica propia como son la necesidad de preservar el principio de celeridad del proceso laboral, el cuidado y la corrección en el cumplimiento del requisito relativo a la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada y, fundamentalmente, la garantía para la parte recurrida —por la que también debe velar el órgano judicial— de que ni sufrirá dilaciones innecesarias en la tramitación del recurso y, sobre todo, de que no asumirá la carga de impugnar, para la defensa de sus propios derechos, la existencia de contradicción con todas y cada una de las sentencias que el recurrente desee aportar. Tales argumentos, que no carecen de razonabilidad ni resultan arbitrarios, no afectan tampoco al derecho de defensa de la parte ya que, como el propio Tribunal Supremo ha mantenido, la limitación a los efectos de acreditar el presupuesto de acceso al recurso no impide la alegación, aportación ni cita de cuantas sentencias desee el recurrente para fundamentar luego la infracción legal o de jurisprudencia que sustenta este recurso extraordinario y excepcional, como tampoco vulnera aquel derecho la opción subsidiaria por la sentencia más moderna para el caso de que aquél no realice la selección, ya que el órgano judicial habrá preservado en cualquier caso la prioridad de aquél en la tarea de escoger la resolu-

ción contradictoria que considere que sirve más adecuadamente al cumplimiento del presupuesto procesal y, en definitiva, a la defensa de los intereses y derechos legítimos que se ventilan en el recurso. En definitiva, la interpretación del Tribunal Supremo responde a una finalidad legítima acorde con la naturaleza misma del recurso de casación para la unificación de doctrina, de la que no deriva para el recurrente ninguna vulneración constitucional, puesto que, ni impide acreditar la contradicción de doctrina, ni prejuzga la decisión posterior sobre la admisión o estimación del recurso.

Sexto: La segunda queja planteada en amparo se refiere a la incongruencia omisiva en la que, según el recurrente, habría incurrido la sentencia dictada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al no dar ninguna respuesta a su alegación sobre la existencia de una causa de inadmisión en el recurso presentado por el INEM. En el momento de anunciar dicho recurso, la Entidad Gestora había indicado que no aportaba la certificación de que comenzaba el abono de las prestaciones por desempleo reconocidas por el Juzgado por estar ya agotadas al corresponderse a un período anterior a la fecha de la sentencia de instancia, indicación que reiteró en el segundo escrito de anuncio del recurso a pesar de que el órgano judicial ya había procedido a corregir el error de transcripción de la fecha a partir de la cual se reconocía el derecho; el recurrente interpuso entonces reposición contra la providencia que tuvo por anunciando el recurso haciendo constar el incumplimiento del art. 191.4 LPL (actual art. 192.4 LPL), recurso que fue impugnado por el INEM admitiendo que, en efecto, había existido un error involuntario que procedía a subsanarse de inmediato aportando la preceptiva certificación, por lo que el Juzgado de lo Social desestimó el recurso de reposición, tuvo por subsanado el defecto y por anunciado en tiempo y forma la suplicación. Sin embargo, en su escrito de impugnación, el recurrente reiteró la existencia de una causa de inadmisión a la que la sentencia del Tribunal Superior, que estimó en cuanto al fondo el recurso del INEM, no ha dado ninguna respuesta.

Para valorar si esa falta de respuesta constituye una incongruencia omisiva vulneradora del art. 24.1 CE, ha de recordarse la reiterada jurisprudencia de este Tribunal según la cual aquélla identifica una falta de pronunciamiento por parte del órgano judicial sobre alguna de las pretensiones efectivamente planteadas ante él por las partes, que alcanza relevancia constitucional cuando la pretensión queda imprejuzgada y se produce, en consecuencia, una denegación material de justicia al desconocerse el derecho a obtener una respuesta fundada en Derecho, que constituye la esencia de la tutela judicial efectiva (entre otras muchas, SSTC 13/1987, 28/1997, 5/1990, 95/1990, 108/1990, 160/1992, 91/1995, 85/1996). Tratándose de omisiones relativas a las causas de inadmisión de un recurso, hemos declarado que aquel derecho sólo puede resultar afectado en tanto la falta de respuesta permite un pronunciamiento sobre el fondo que resulta imposible por existir una causa impeditiva (STC 116/1986, FJ 3.º, posteriormente reiterada en SSTC 169/1988, 244/1988, 34/1992, 245/1993) y determina para la parte recurrida la dilación o la imposibilidad, caso de ser estimativo, de ejecutar la sentencia de instancia que le fue favorable (STC 245/1993, FJ 3.º), sin que, de otro lado, se integre en el art. 24.1 CE un supuesto derecho a la inadmisión en cualquier caso de los recursos interpuestos por la parte contraria (SSTC 116/1986, 187/1989, 293/1994).

En el caso que nos ocupa, la falta de respuesta al motivo opuesto por el recurrente no ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva atendiendo a la doctrina que acaba de recordarse, ya que su alegación no cuestionaba ni la existencia del recurso ni la recurribilidad de la sentencia (SSTC 5/1986, 116/1988, 34/1992, 109/1992, 38/1993, 146/1995, 56/1996), sino que se refería únicamente a una irregularidad formal que en ningún momento alcanzó al incumplimiento del requisito controvertido. La necesidad de que la Entidad Gestora recurrente aporte la certificación acreditativa de que comienza el abono de la presta-

ción y de que lo proseguirá durante toda la tramitación del recurso constituye una exigencia no meramente formal, cuya finalidad, como ya declaramos en la STC 124/1987, es la de que el beneficiario que ha visto reconocido en una sentencia judicial un derecho de contenido económico no quede desasistido durante la tramitación del recurso que interponga la Entidad condenada, que puede ser excesivamente larga, así como la de impedir tácticas dilatorias gravosas para la parte recurrida. Pues bien, en el presente caso y atendiendo a dicha finalidad no cabe la menor duda de que, en primer lugar, no se cuestiona el cumplimiento material del requisito, ya que el recurrente en amparo en ningún momento ha alegado o discutido que no se le estuviera abonando efectivamente la prestación reconocida en la sentencia de instancia, de modo que la cuestión planteada al órgano judicial no tenía como objetivo el cumplimiento de la finalidad a la que sirve aportar la certificación.

Pero es que, además, tampoco desde el punto de vista estrictamente formal se observa que el requisito fuese incumplido por el INEM. Si bien esta Entidad Gestora manifestó en dos ocasiones distintas que no procedía cumplir con lo prevenido en el art. 192.4 LPL por estar agotada la prestación, lo cierto es que en el escrito de impugnación al recurso de reposición interpuesto por el demandante admitió las razones de éste e inmediatamente aportó la certificación, lo que llevó al órgano judicial de instancia a entender subsanado el error y tener por anunciado el recurso. La decisión del Juzgado resulta plenamente admisible desde la perspectiva constitu-

cional ya que, como advierte el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, este Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones el carácter subsanable de los defectos relacionados con este requisito legal (así, SSTC 178/1988, 247/1991, 110/1992), lo cual permite concluir que no existía elemento de juicio del que quepa deducir ninguna duda razonable de que la respuesta del Tribunal Superior hubiera conducido a un resultado diferente.

El requisito se encontraba, pues, cumplido y así hubo de observarlo el Tribunal Superior, sin que pueda considerarse constitucionalmente exigible una respuesta explícita de aquél para una cuestión ya planteada, subsanada y resuelta con anterioridad a la formalización misma del recurso de suplicación. La desestimación implícita del motivo que claramente cabe deducir en este caso no resulta contraria al derecho a obtener una respuesta sobre él ni, especialmente, a la exigencia de motivar las resoluciones judiciales, que en otras ocasiones ha considerado este Tribunal (SSTC 27/1988, 244/1988, 109/1992, 91/1995, 146/1995), habida cuenta de la naturaleza y carácter subsanable del defecto alegado y de su cumplimiento efectivo tanto material como formal.

Séptimo: Finalmente, respecto a la vulneración del art. 14 CE por parte del Tribunal Superior de Justicia, el recurso de amparo debe ser igualmente desestimado. Ha de advertirse, en primer término, que en ningún momento del procedimiento judicial se ha suscitado la posible lesión de aquel precepto constitucional, ya que el debate ante los órganos judiciales se ha planteado en términos de estricta legalidad

ordinaria acerca del carácter laboral o no de la relación del recurrente con la empresa y si procedía o no el reconocimiento a la prestación por desempleo pese a haber cotizado al Régimen General de la Seguridad Social. Abundando en esta falta de invocación del derecho fundamental, que sería ya de por sí suficiente para rechazar el motivo de amparo [art. 44.1 c) LOTC], debe constatar, como advierte tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado, que el recurrente, aludiendo indistintamente al derecho a no sufrir discriminación y al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, no aporta en ningún caso término adecuado alguno de comparación a partir del cual pudiera valorarse si, efectivamente, ha sufrido un trato desigual que pudiera comportar una vulneración de alcance constitucional, limitándose a aludir genéricamente a «otros ciudadanos» a los que sí se ha reconocido su derecho. En cualquier caso y frente a las alegaciones del recurrente, se desprende que los órganos judiciales se han limitado a resolver si concurría en él la condición de trabajador por cuenta ajena como primer requisito legal para poder ser beneficiario de aquellas prestaciones, concluyendo el Tribunal Superior en sentido negativo a la vista de las condiciones en las que se desarrollaba en la empresa la prestación de servicios; no se aprecia, pues, en el razonamiento judicial ningún elemento de juicio del que quepa derivar que se ha denegado lo solicitado de forma discriminatoria, sino únicamente una estricta aplicación de la legalidad ordinaria que carece, consecuentemente, de toda trascendencia constitucional.

COMENTARIO

El presente recurso de amparo se funda en tres motivos: existencia de una incongruencia omisiva, vulneración del principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE y vulneración del art. 24.1 en relación con el derecho a los recursos.

Aquí sólo nos vamos a referir a esta última cuestión, en la medida en que la decisión acerca del derecho de igualdad y sobre la incongruencia omisiva reitera una bien conocida doctrina del Tribunal Constitucional, y no plantea puntos controvertidos ni novedosos.

El tema central del recurso de amparo se centra en resolver si la limitación que impone el Tribunal Supremo en la aportación de sentencias de contraste en la fase de admisión de recurso de casación para unificación de doctrina, es lesiva del art. 24.1 CE.

El recurso de casación para la unificación de la doctrina en la vigente LPL atiende, por un lado, a la finalidad de unificar la jurisprudencia emanada de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia; y por otro lado –y a diferencia del anterior recurso de casación en interés de ley que no afectaba en ningún caso a la situación jurídica creada por el fallo–, cumple también la función de tutelar los derechos subjetivos de las partes, y corregir las infracciones que se hayan producido en la sentencia de suplicación.

Puesto que la existencia de contradicción entre sentencias de suplicación es lo que da origen al recurso, en el trámite de admisión ya se exige acreditar que al menos existe una sentencia contradictoria (ya haya sido dictada por la misma Sala de lo Social o por la de otros Tribunales Superiores de Justicia, o por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo). Así, el actual art. 222 LPL configura como presupuesto de admisión de este especial recurso de casación, que en el escrito de interposición se realice «una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias y con fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada (...)».

En un principio, parece que esta norma permite al recurrente aportar una o varias sentencias para acreditar la existencia de doctrina contradictoria. Así se venía entendiendo en la práctica, de tal modo que los abogados, para dar mejor cumplimiento a este requisito, aportaban varias sentencias de contraste. A partir de cierto momento, sin embargo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo reacciona, sugiriendo que se aporte una única sentencia de contraste, pues una sola es suficiente para acreditar la exigida contradicción a efectos de la admisión del recurso (así, entre otras, la STS de 30 de noviembre de 1994; *vid.* ALONSO OLEA, M. y MIÑAMBRES PUIG, C., *Derecho Procesal del Trabajo*, Madrid, 1997, pág. 420). Posteriormente, a partir del año 1995, el Tribunal Supremo exigirá que sólo se aporte una sentencia de contradicción y, en caso de que la parte aportara más de una, se le concede un plazo al recurrente para que seleccione la sentencia de contradicción que servirá para analizar el presupuesto admisión. Si la parte no efectúa esa selección, el propio Tribunal Supremo elegirá la más moderna de las citadas (así, las SSTs de 17 de abril, 10 de julio de 1996, 28 de febrero y 17 de marzo de 1997, entre otras muchas).

Afirma la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que la referencia en el art. 222 LPL a la sentencia o sentencias no ha de interpretarse en el sentido de que la parte puede aportar en fase de admisión un número ilimitado de sentencias de contraste, pues ello conduciría al absurdo y a hacer inviable el control de este presupuesto de admisión. Por ello exige que sólo se aporte una sentencia por cada tema de contradicción. Así, la referencia a una pluralidad de sentencias en el art. 222 LPL se explica por la necesidad de aportar varias sentencias cuando varios sean los puntos contradictorios. Tal interpretación restrictiva se justifica en aras del principio de celeridad que preside el proceso laboral y en aras de la eficacia. Lo cierto es que la lectura del art. 222 LPL admite esa interpretación. Pero es que, además resulta muy sensato que si una sentencia es suficiente para acreditar que existe una doctrina contradictoria, las demás, efectivamente resultan innecesarias, y sólo contribuyen a retrasar la decisión de admisión, en contra de la economía procesal.

Es precisamente esa limitación de sentencias de contraste la que funda el presente recurso de amparo. La parte recurrente alega que esa interpretación restrictiva del art. 222 LPL es contraria al art. 24.1 CE, pues «los órganos jurisdiccionales no pueden limitar o restringir el derecho de defensa a través de imposiciones legales que el legislador no contempla» (*vid.* punto 3 de los antecedentes), y entiende que el Tribunal Supremo, a la hora de decidir acerca de la inadmisión de su recurso debió tomar en consideración las tres sentencias de contradicción que aportó.

A mi juicio, el Tribunal Constitucional resuelve acertadamente al desestimar el presente recurso. La interpretación de los presupuestos de admisibilidad de este especial recurso de casación laboral ha de enfocarse necesariamente, como sostiene el propio Tribunal Constitucional, desde la perspectiva del derecho a los recursos. En ese sentido, la restricción impuesta por el Tribunal Supremo en el número de sentencias que pueden aportarse en fase de admisión, no supone un obstáculo en el acceso al recurso, pues con una única sentencia de contraste –eso sí, bien elegida–, puede acreditarse perfectamente el presupuesto de admisión.

Por otra parte, y como se señala en el FJ 5.º, dicha limitación impuesta por el Tribunal Supremo, no obedece a una decisión arbitraria, irracional o injustificada. Se explica adecuadamente por la propia fi-

§ 192. Banchs Naya. TC 1.ª S 89/1998, de 21 abril

nalidad de la fase de admisión, y persigue promover la economía procesal y no incidir negativamente en el principio de celeridad. En este sentido, no obstante, no afectaría al principio de celeridad que el Tribunal Supremo admitiese más de una, siempre y cuando, el número de sentencias no fuese excesivo o desproporcionado. Así, en el presente caso, el hecho de que el Tribunal Supremo hubiese tomado en consideración las tres sentencias aportadas por el recurrente, no hubiese incidido de forma determinante en la celeridad procesal, aunque tal análisis probablemente no hubiera cambiado la decisión de inadmisión.

Por último, y éste me parece el punto más interesante, el Tribunal Constitucional argumenta que la interpretación que el Tribunal Supremo ha dado al art. 222 LPL, no supone merma alguna del derecho de defensa, puesto que la aportación de sentencias sólo se limita a los efectos de la admisión del recurso, mientras que al momento de fundamentar la infracción legal, la parte recurrente tiene libertad para citar todas las sentencias que estime oportunas.

A primera vista, podría pensarse que si el recurso de casación persigue la unificación de doctrina, la acreditación de una sentencia contradictoria debería llevar a la estimación del recurso. Así entendido, no resultaría coherente que en fase de admisión se limitara el número de sentencias de contraste y, sin embargo, en la fundamentación existiera plena libertad en cuanto al número de resoluciones. Si la contradicción fuera el elemento determinante de la estimación del recurso, se estaría llevando a la fase de admisión una cuestión de fondo, respecto de la cual no sería admisible restricción en cuanto a la aportación de sentencias.

Sin embargo, atendiendo a las especiales características de este recurso, en el que prima el *ius constitutionis* sobre el *ius litigatoris*, tal incoherencia sólo es aparente. El recurso de casación para unificación de doctrina presenta dos vertientes: la contradicción y la infracción legal o quebranto de la jurisprudencia. La finalidad del recurso de casación para unificación de doctrina es —como su propio nombre indica— la unificación de jurisprudencia. No obstante, las contradicciones no se corrigen en abstracto, sino únicamente cuando en la sentencia impugnada se ha producido una infracción legal o quebranto en la unidad jurisprudencial. En este punto, es preciso distinguir entre contradicción, cuya existencia condiciona la admisión del recurso, e infracción legal o quebranto de la jurisprudencia, que constituye propiamente el motivo del recurso: «el motivo del recurso no puede ser la contradicción de sentencias (...) y el mero hecho de que la contradicción exista no puede suponer la estimación del recurso» (vid. MONTERO AROCA, J. Y OTROS *Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral*, título II, Madrid, 1993, pág. 1241). De esta manera es posible que exista contradicción, pero no haya infracción legal, lo cual determinará la desestimación del recurso; y es igualmente posible, aunque menos frecuente, que acreditada la contradicción entre sentencias y la existencia de una infracción legal, no se estime el recurso porque no haya quebranto en la formación de la jurisprudencia (*Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral*, título II, *cit.*, pág. 1.248).

En suma, puesto que la limitación de sentencias de contraste sólo afecta a la fase admisión, y no afecta a la posterior motivación del recurso, no puede apreciarse merma del derecho de defensa en la restricción de sentencias de contraste impuesta por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo para admitir el recurso de casación para unificación de doctrina.

Lorena Bachmaier Winter

§ 193. Cristóbal Porras. TS 3.ª A 23 septiembre 1997

1277

§ 193.—DENEGACION DEL ACCESO AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION POR RAZON DE LA CUANTIA SIN AUDIENCIA A LA PARTE RECURRENTE

Santiago Cristóbal Porras c. Jefatura Provincial de Tráfico de Avila.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1.ª).

Auto de 23 de septiembre de 1997, recurso núm. 3950-1997.

Contencioso-administrativo: recurso extraordinario de casación (sanción por infracción de las normas de circulación).

Abogados: no constan.